

# EL FORO VALENCIANO,

REVISTA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Esta Revista se publica los días 1 y 15 de cada mes.

Se suscribe en Valencia en el centro de suscripciones plaza de la Constitucion, y en la imprenta de José Rius, plaza de San Jorge. Fuera, dirigiéndose á la Redaccion del *Foro Valenciano*, calle de Salinas, núm. 16, remitiendo el importe de la suscripcion en sellos de franqueo ó libranzas del giro mútuo. — PRECIO DE SUSCRICION: 3 rs. al mes en Valencia y 8 por bimestre fuera, franco de porte.

El 3 de los corrientes tuvo lugar la apertura de los Tribunales. El muy ilustre Sr. D. Joaquin de Palma y Vinuesa, Regente de la Excm. Audiencia del Territorio, leyó un discurso, que igualando al del año anterior en elegancia y erudicion, viene á ser el complemento de la idea que precedia en aquel. Le publicamos á continuacion íntegro, esperando que nuestros lectores verán con gusto tan apreciable trabajo.

SEÑORES:

Sin duda que presumis cuál será hoy el tema de mi discurso, recordando, que en los años anteriores, he procurado trazar, aunque á grandes rasgos, la historia de las magistraturas que tuvo nuestra patria, contrayéndome á las unipersonales. Voy á completar el pensamiento, haciendo algunas indicaciones acerca de los tribunales colegiados, y no me detendré á presentar las ventajas que sobre aquellas tienen. Esta es una verdad tan óbvia y palpable y tan generalmente sentida, que su prueba, como en las intuitivas, fuera de todo punto innecesaria, si ya no la hubieran hecho inadmisibile los resultados de una larga y constante experiencia, y la comparacion, elevándola á la esfera de las verdades matemáticas, que resisten las demostraciones.

II.

Comun es entre los escritores de derecho tomar por punto de partida, cuando de la materia tratan, las instituciones de la Audiencia y del Consejo, y debo confesar, que tambien habia pensado seguir este rumbo; pero estudiando la historia, las compilaciones legales y las colecciones canónicas se produce el convencimiento de que se confundian en esto las ideas; porque lo cierto es, que desde los mas antiguos tiempos existieron en España tribunales colegiados, si bien no continuadamente, ni con una perfecta organizacion.

III.

No hay datos suficientes para juzgar si fueron ó no conocidos de los pueblos que primitivamente habitaron el pais en que vivimos. Tampoco existen los bastantes para que pueda deducirse, sin recurrir á las hipótesis, que se hallaron establecidos en los territorios que en él colonizaron los Fenicios, Griegos y Cartagineses, aun cuando es de suponer que hubiera analogía entre las instituciones de las colonias y aquellas que regian en sus metrópolis, y en Fenicia y en Cartago, en Esparta y en Atenas fueron ley comun los tribunales colegiados. Pero ya bajo la dominacion romana los encontramos en los *conventos jurídicos*, y aun en la tan generalizada costumbre de la



conurrencia de los *asesores* á todos los tribunales.

No era la instruccion la dote que mas resaltaba ó distinguia á los jueces romanos. Frecuente, y hasta casi general, era que ignorasen las leyes y el modo de enjuiciar, y los que en España hubo, se igualaban en esto con los de las otras provincias romanas. Necesarios se hicieron por lo tanto magistrados que los iluminaran con sus consejos, y raro era el *forum* donde no se veian *asesores*, con cuyo acuerdo dictaban los jueces las sentencias.

En Braga, Astorga, Tarragona, Lugo, Coruña, Zaragoza y Cartagena en la provincia Tarraconense; en Santataren, Mérida y Bejar en la Lusitania, y en Córdoba, Ecija, Sevilla y Cádiz en la Bética, poblaciones conocidas con el nombre de *conventos*, se reunian periódicamente verdaderos tribunales colegiados, que, en audiencia pública, fallaban los asuntos de alguna importancia. Componíanse de la autoridad superior del distrito y de cierto número de jueces ó personas entendidas en el derecho, y aquella y éstos, *conjuntamente*, adoptaban la resolucion que creían mas oportuna.

#### IV.

Conocidos eran tambien de los Wisigodos los tribunales de esta clase, cuando atravesaron los pirineos. En los *concilios* ó juntas generales que celebraban, siguiendo su antigua costumbre, dos veces cada mes, y en los que tenian voz y voto todos los ciudadanos libres, se juzgaban todos los delitos y con especialidad los de traicion, desercion y cobardía.

Los *Die hert zoges*, los *Gravens*, y los *Vorstes*, y por regla general, todos los que egercian jurisdiccion estaban obligados á asociarse á algunos ciudadanos para

fallar los litigios, y tenian prohibicion de pronunciar sentencia por sí solos.

Mucho tiempo despues de haberse establecido en la península, y aun cuando su organizacion judicial habia variado por completo, mejorándose notablemente, se observaba este precepto, como así un distinguido escritor no ha vacilado en llamarle.

El *Fuero Juzgo* vino á renovarlo; el juez puede, dice una de sus leyes, *tomar consigo algunos que oyan el pleito con el, ó con quien se conseie*. Hasta el mismo Rey tenia obligacion de acompañarse para juzgar con otros magistrados; un cánón del concilio IV de Toledo se la recordó á Sisenando, encargándole que se abstuviese de sentenciar por sí solo y en secreto, y que procurara hacerlo en público y con el dictámen de otros.

Pero, aparte de esto, encontramos en la monarquía Wisigoda tribunales compuestos de mas de una persona.

Con arreglo á las prescripciones del concilio III de Toledo, uno especial formado del diocesano y de un juez secular debia conocer privativamente de los delitos de idolatría, y tambien de los de infanticidio y otros que menciona.

En todos aquellos casos en que alguna de las partes se sentia agraviada con la sentencia del juez debia reunirse un tribunal compuesto del obispo, del que dictó el fallo, *atque sacerdotibus vel idoneis aliis viriis*, segun una ley del *Fuero Juzgo* latino, ó como mas esplicitamente dice la que á ella corresponde en el código romanceado, *del obispo en cuya tierra es, del iuez que iudgó tuerto, é otros obispos; é otros omnes buenos*, para ver nuevamente el negocio y terminarlo *communi sententia*.

Disponia tambien el mismo código que si discordasen se enviara el pleito al



Rey, y que un tribunal que constituirían los jueces *que mandase*, lo fallara después de haber oído al que *iudgó* y que se *querrelló de tuerto*.

Finalmente, los concilios Toledanos, á los cuales concedieron los Reyes facultades judiciales, de que en mas de una ocasion hicieron uso, deben asimismo enumerarse entre los tribunales colegiados.

#### V.

De todo punto indudable es que el *Codex Wisigothorum* sobrevivió al imperio de D. Rodrigo, y que continuó vigente por espacio de mucho tiempo después de la invasión sarracena; y esto induce á creer que las disposiciones del mismo, ya referidas, seguirían igualmente en observancia.

Mencion hace la historia de sentencias dictadas en negocios civiles y criminales en los tiempos de D. Bermudo II, y aun en los de D. Alonso el Magno con arreglo á lo que el *Fuero Juzgo* prescribía. Sabido es que D. Alonso II el Casto restableció las leyes Wisigodas, que D. Alonso V las confirmó, y que los Reyes VI y VII del propio nombre encargaron á los habitantes de Toledo que se acomodaran en sus pleitos á lo que aquel código ordenaba. D. Sancho el IV mandó que se juzgase por esas mismas leyes, y todavía en la segunda mitad del siglo XIV, en el reinado de D. Juan II, eran varias las ciudades en que regían. No son pocos también los ejemplos que presentarse pudieran de escrituras otorgadas en los siglos XII y XIII con sujeción á las prescripciones de la ley de los godos.

Los concilios continuaron asimismo haciendo uso de las facultades judiciales. Basta tener en cuenta, para adquirir el convencimiento de ello, las resoluciones adoptadas, entre otros, por los que se

celebraron en Oviedo en 811, y en Cozanza á mediados del siglo X.

En los diversos estados que los Arabes y los Moros fundaron, en las provincias meridionales, encontramos igualmente tribunales colegiados. Tanto en Córdoba como en Granada los hubo y con una organización idéntica. Componíanse del *Kadhy-al-Kodhah*, ó sea *Cadi de los Cadis*, y de otros cuatro magistrados, y sus atribuciones eran juzgar á los jueces y conocer de los pleitos y causas que hasta el Califa ó el Rey llegaban, en apelación aquellos y en consulta éstas.

#### VI.

Durante la reconquista ejercieron la jurisdicción no tan solo los tribunales instituidos por la autoridad Real, sino otros también que lo fueron por los fijos-dalgo, por los municipios y por las hermandades y cofradías.

Los de los ricos-hombres fueron todos unipersonales; pero en los comunes y en las cofradías se nota una marcada tendencia hacia los colegiados. Así vemos que en Toledo se hallaba establecido, y su *Fuero* prescribía, que los Alcaldes mayores no podían juzgar por sí solos sino acompañados de diez vecinos honrados, y que los elegidos por los muzárabes debían atenerse en un todo á las disposiciones del *Fuero Juzgo*; así también, que en Córdoba tenían precisión los jueces de acompañarse en los propios términos, y que este código era la única ley.

En cuanto á las hermandades, observamos, que la de los reinos de Leon y Galicia, en la cual entraron Salamanca, Zamora, Leon, Oviedo, Astorga, Ciudad-Rodrigo, Benavente, Mansilla, Villalpando y otros muchos pueblos, estableció que un tribunal compuesto de cierto número de caballeros y de hidalgos conocería



privativamente de todos los delitos, y que á él debian ir en apelacion los negocios que sentenciaran los merinos del Rey.

#### VII.

El *Espéculo*, primero de los códigos de D. Alfonso el Sábio, previene, que *todos aquellos que an poder de judgar tomen algunos que oyan con ellos los pleitos, los que tales deben ser para esto que sean sabidores de derecho.*

*En pleito de justicia*, añade una de sus leyes, *dezimos que en todas guisas son tenudos de los tomar por que la justicia se faga mas derechamente é mas sin dubda.*

#### VIII.

El *Fuero Real*, en cuya composición no entraron otros elementos que las leyes Wisigodas y los fueros municipales, y con especialidad las primeras, se limitó á reproducir la ley del *Libro de los godos* que autorizaba á los jueces para que se acompañasen al fallar los litigios, dando facultad á los Alcaldes para que tomasen *algunos que oyan los pleitos juntamente con ellos.*

#### IX.

Fundándose las *Partidas* en que *nasce gran pró del consejo cuando es bien catado*, y en que los sábios antiguos decian: *todas las cosas faz siempre con consejo*, quisieron que *todos los judgadores* antes de dar su *juyzio* se acompañaran de *omes sabidores de los consejar por arte ó por uso*, y que éstos fuesen *entendidos, é de buena fama, é sin sospecha, é sin mala cobdicia*, á los cuales designan con el nombre de *consejeros*. «*Si vos avedes por sospechosos algunos omes sabidores desta villa ó desta corte*, debian comenzar por decir los jueces á las partes, *dádnoslo por escrito; é despues que los ouiere dados es-*

*critos deve tomar el judgador que ha de judgar el pleito, uno ó dos de los otros que sean sin sospecha é mandar amas partes que vengan antellos é recuenten todo el pleito de cómo pasó, é muestren é razonen ante aquellos consejeros aquellas razones que mas entendieren que les ayudaren..... Los consejeros deben fazer escribir en poridad su consejo..... E los jueces deben formar su juicio en aquella manera que el consejo les fue dado.....*”

Mandaron tambien que los *adelantados*, para llenar su cometido, *así como conviene*, debian *auer consigo omes sabidores del Fuero é de derecho*, que les *ayudasen á librar los pleitos é con quien hayan consejo sobre las cosas dubdosas. E esto les debe dar el Rey*, continúa la ley, *porque sean atales como dijimos que deben ser los que judgan en su corte.* De donde se infiere, que los *consejeros* de los *adelantados* eran magistrados verdaderos, que debian hallarse adornados de las cualidades propias de los jueces de la corte, y que eran, no elegidos por aquellos á quienes *ayudaban* á librar los pleitos, sino de nombramiento real.

El tribunal del *adelantado* puede, por lo tanto, considerarse, teniendo en cuenta las prescripciones del mas perfecto de los códigos alfonsinos, como colegiado, y garantidos todos los de las demás autoridades que egercian jurisdiccion contra las desventajas del juez único con la institucion de esos *consejeros*.

#### X.

Todavía antes de la creacion de la Audiencia y del Consejo hallamos un tribunal compuesto de *tres omes buenos, é entendidos, é sabidores de los fueros*, que el ordenamiento publicado en las cortes de Zamora de 1274 planteó para que conociese de las *alzadas de toda la tierra.*



Si no se conformaban en las sentencias debian llamar á otro ú otros jueces de los ordinarios, y si aun así discordaban, decidia el Rey.

# XI.

Llegamos á la Audiencia, que es ciertamente el primero de los tribunales colegiados que vemos con una organizacion bien definida y regularizada, y cuya estructura y mecanismo, con las modificaciones y reformas que ha ido recibiendo, son de tal escelencia, que hacen casi imposible su degeneracion, esplicando esto, el por qué, á pesar de los embates continuados, y de los rudos ataques que esta institucion ha sufrido, no solo vive y se conserva en ella, intacta y como en sagrado depósito, la pureza, sino que mejoran sus condiciones, adquiriendo cada dia nuevo vigor y robustéz, y alcanzará el perfeccionamiento posible en lo humano, luego que se practique y aplique y convierta en hecho, lo que en teoría y en principio se halla sancionado, ya todo el mundo reconoce como necesario, y ninguno se atreve á combatir.

La Audiencia fue creada por D. Enrique II en las cortes de Toro de 1371, en las que decia: «*Tenemos por bien ordenar la nuestra justicia..... de esta manera, que sean siete oidores de la nuestra Audiencia, é que fagan la audiencia en nuestro palacio..... é que se asienten en audiencia tres dias en la semana, lunes, miercoles é viernes..... é que estos siete oidores non sean alcalles..... é de los juicios que dieren que non haya alzada nin suplicacion alguna.*» Los oidores fueron tres obispos y cuatro letrados, y nombró además diez alcaldes ordinarios de la corte para las causas criminales.

Con grande afan han procurado algunos buscar el origen de la Audiencia en

tiempos anteriores; pero con datos que son irrecusables se prueba nuestro aserto. En una peticion de las cortes de Ocaña de 1468 decian los procuradores á Enrique IV: «*El Señor Rey Don Enrique el viejo de gloriosa memoria vuestro progenitor..... buscó jueces que tovesen sus veces en el régno á los cuales pusieron nombres oidores..... é de ayuntamiento de sanctos se falló el nombre de Abdiencia, la cual despues de su fundamento bien se encontró ser casa de justicia que la sabiduría edificó sobre siete columnas.*»

Y sin necesidad de ir mas lejos, con el mismo ordenamiento de Alcalá, dado en 1348, se prueba que la Audiencia no era entonces conocida, pues leemos en su introduccion, que se formó dicho código con parecer y consejo de los prelados, ricos-hombres, y alcaldes de corte, sin hacer mencion alguna de los oidores, no haciéndola tampoco dos de sus leyes en que con varios motivos se enumeran las magistraturas que entonces existian, y tales omisiones no eran posibles, ni se concibieran en otro supuesto.

Las cortes de Bribiesca de 1387 suplicaron al Rey «*que además de los siete oidores que pusiese otro é fuesen ocho,*» á lo que D. Juan I accedió, nombrando dos prelados, personal que despues aumentó todavía, fijándolo por último en diez letrados y seis eclesiásticos que fueron los arzobispos de Toledo, Santiago y Sevilla y los obispos de Osma, Zamora y Segovia.

Se ve, pues, la gran importancia que se dió á la Audiencia, desde su creacion, por la clase y rango de las personas llamadas á constituirla, y no es menos notable, que ya en aquellos tiempos se apreciara justamente y quizá mejor que lo ha sido en los posteriores, lo mucho que interesa á la sociedad el que los magistrados á quienes se confia la custodia de



los mas caros derechos del hombre, y que han de decidir sobre sus bienes, su honor y su vida, puedan conservar el prestigio y lustre de su posicion, asegurando su independencia y su decoro; pues consta, que con laudable y previsora solicitud se les consignaron entonces unas dotaciones que en el dia parecieran sin duda escesivas. 50,000 maravedís se señalaron á los obispos, 25,000 á los letrados y 15,000 á los alcaldes, cantidades que, en correspondencia de las épocas, formarían hoy unos crecidos sueldos segun el curioso cálculo de un célebre escritor. «En aquel mismo año, dice, 1371, se tasó la fanega de trigo en la Corte á 18 maravedís y fuera de ella á 15. Por consiguiente, con el salario de los oidores se podrían comprar unas 1,500 fanegas, y siendo actualmente el precio ordinario de este grano de 40 á 50 reales venia á ser la renta equivalente á mas de 70,000 rs., porque el pan como alimento mas universal es el que regula generalmente el precio de todas las cosas y la verdadera estimacion de la moneda.»

Era preciso, continúa, que los magistrados pudieran mantenerse con decencia y conservar su independencia.... Por cuyas consideraciones, á los pingües salarios de aquellos jueces añadieron Don Enrique II y sus sucesores otras grandes preeminencias, concediéndoles los honores de su consejo y el poder llevar adornos de oro y plata en sus divisas, bandas, sillas, frenos y armas, distincion que no gozaba ninguno, aunque fuera de la primera nobleza, como no estuviese armado caballero, y nombrando á los oidores para embajadas y otras comisiones de la mayor importancia.

Ello es, que los monarcas españoles siempre tuvieron el propósito, manifestaron el deseo, y aprovecharon la ocasion de

enaltecer á la magistratura, ofreciendo en esta parte la historia muchos y repetidos ejemplos del alto aprecio que les merecian la institucion y los magistrados que en su nombre administran la justicia, de lo que nosotros tambien podemos testificar con orgullo por el notable suceso que mencionaré despues, y que recuerda lo ocurrido en la chancillería de Valladolid el año de 1518, cuando el gran Emperador Carlos V asistió en ella al despacho de una audiencia, mandando que los oidores se cubrieran.

En un principio, la Audiencia no tuvo lugar fijo y determinado, porque seguía siempre á la corte, y ésta variaba su residencia de continuo. Sus estrados eran entonces el palacio del Rey, la casa del Canciller mayor, la Iglesia ú otro sitio, el mas decente y á propósito que se encontraba.

D. Juan I fue tambien quien ordenó que la Audiencia alternara por trimestres entre Medina del Campo, Olmedo, Madrid y Alcalá de Henares, á fin de no agobiar á los pueblos con el gravámen de los alojamientos; pero esta disposicion no fue observada, y en 1390 se mandó por el mismo Rey que se estableciera de un modo permanente en Segovia. «*La primera cosa que ordenamos, decia, es que la nuestra Audiencia esté continuamente en esta ciudad.*» Y decretó la nueva forma que habia de guardarse para las alzadas y suplicaciones.

Por último, este Rey, que como se le califica por el distinguido escritor citado, fue la inteligencia creadora de esta parte de la administracion pública, autorizó á la Audiencia para, que en su nombre, librara las provisiones que antes era preciso se suscribieran por su mano.

Algunos han creído que durante la minoría de D. Juan II, sus tutores la



Reina Doña Catalina y el infante D. Fernando, que gobernaban el reino, según la disposición testamentaria de Enrique III, establecieron dos Audiencias, en Segovia la una y en Sevilla la segunda, cuando no hicieron más que acomodar la única existente á las necesidades del momento, dividiéndola en dos secciones que pronto volvieron á reunirse, siguiendo así por más de siglo y medio.

Los Reyes Católicos, por la Real cédula que dieron en Medina del Campo en 24 de Marzo de 1489, trasladaron la Audiencia de Segovia á Valladolid. «Y mandamos, dijeron, que la dicha nuestra corte y chancillería esté y resida en la noble villa de Valladolid, en tanto que nuestra merced y voluntad fuere,” y publicaron las ordenanzas por que había de regirse, que vinieron á amenguar su autoridad en algún tanto.

Ensanchados luego los límites de la monarquía y por el gran número de negocios que afluan de todas partes, fue cuando, en el año de 1494, crearon y plantearon una nueva Chancillería y Audiencia en Ciudad-Real. Después de la conquista de Granada, último refugio de la dominación árabe en España, entre las muchas instituciones con que aquellos Reyes, de gloriosa memoria, quisieron dotar y enaltecer su nueva y hermosa adquisición, fue quizá la más importante la de la Chancillería, que allí desde Ciudad-Real llevaron, y que conservó este nombre con la de Valladolid, á diferencia de los demás tribunales de esta clase, que luego se fueron estableciendo, y de los que se distinguían por su categoría más elevada, por la mayor extensión del territorio que gobernaban, y por la amplitud de sus atribuciones, pues les estaba reservado el conocimiento de ciertos asuntos que se negaba á las otras Audiencias.

La de Valencia, sin embargo, á que tenemos la honra de pertenecer, también fue Chancillería, y tuvo este nombre é iguales facultades y privilegios que las de Granada y Valladolid, por cuyas ordenanzas se rigió. Así lo acreditan muchos de los documentos que se conservan en su archivo, y resulta especialmente de los títulos y actas de posesión de los oidores, cuando después de la guerra de sucesión se instaló el tribunal bajo la presidencia de D. Pedro de Larreategui y Colón, en la casa que fue de D. Juan Pardo, marqués de la Casta, en la plaza del Carmen, funcionando con aquel carácter hasta el año de 1716 en que D. Felipe V la redujo á Audiencia.

Las necesidades de los tiempos posteriores dieron vida á las otras, que creadas en épocas diferentes, vinieron á completarse con las de Cáceres, Albacete y Pamplona, hasta el número de 15 que hoy existen, habiendo desaparecido la antigua diferencia entre ellas y las Chancillerías, y siendo ya hoy todas iguales en categoría, facultades y atribuciones.

Estas fueron muy estensas en un principio, porque no siendo bien conocida entonces la teoría del derecho, se confundían sus prescripciones con las reglamentarias y de mera policía, no habiéndose tampoco deslindado y separado convenientemente, y cual la ciencia aconseja, el ramo administrativo del judicial. Todos hemos conocido, y aun se conserva en gran parte en Ultramar, la antigua organización de las Audiencias, que presididas por el Capitán general del distrito, ejercían funciones notoriamente incompatibles y ajenas de su institución, entendiéndose á la vez que en lo judicial, en la parte económica y gubernativa de los pueblos, hasta el punto de elegir y hacer los nombramientos de personas para los cargos y



oficios municipales, y publicar los bandos de policía y gobierno, cuidando al propio tiempo de su observancia y ejecución. Y en verdad, que todavía, aun después de la institución de los jueces de paz, falta mucho que hacer para que quede bien definida y aclarada la línea divisoria de los asuntos administrativos y de los judiciales, evitándose la confusión y otros males de gravísima trascendencia; á cuyo propósito, se ocurre y descuellá por su magnitud y por la perturbación que introduce en las Audiencias y en la administración de justicia, el conocimiento y decisión, que se las ha reservado, de los recursos que se promueven contra las resoluciones de los Gobernadores civiles para la rectificación de las listas electorales de los diputados á cortes.

Mal que todos comprenden y aprecian con exactitud, y que como no podía menos ha sido también el primero en reconocer el ilustrado actual gobierno de S. M., cuando en la circular de 21 de Setiembre del año último, proponiendo el restablecimiento del jurado para los delitos de imprenta, de que conocen los jueces de primera instancia, se espresa con estas sentidas y notabilísimas palabras: «*Si esta disposición parece conveniente bajo el punto de vista político, no lo es menos por cierto si se la considera en su importancia social, como que separa de las luchas ardientes del día á los encargados de aplicar los eternos principios de justicia.*»

Esperemos, pues, confiadamente que se adoptarán en esta parte por los poderes supremos del Estado, á quienes corresponde, las medidas que con tanta urgencia reclaman la conveniencia pública y el prestigio de la magistratura, dictando también las necesarias para que cesen ó se dificulten por lo menos, la multitud

de competencias y conflictos que tanto embarazan la acción de la justicia, y se suscitan de continuo, entre las autoridades judiciales y las del orden administrativo, fijando ó precisando mas claramente sus respectivas atribuciones.

## XII.

Posterior en algunos años á la institución de la Audiencia fue la del Consejo, tribunal, que tomando diferentes formas, vino á ser el supremo en el orden judicial y administrativo.

Mucho se ha discutido sobre la verdadera época de su creación, y se encuentran muy discordes los autores que se han ocupado de fijarla, produciendo muy diversos resultados sus estudios é investigaciones.

Marina en su teoría de las cortes, y Riol en el informe sobre la institución de los consejos, pretenden remontar su origen hasta el *oficio palatino* de los Wisigodos. Mariana en su historia general de España, Garibay, y Cascales en el discurso histórico de Murcia, atribuyen su formación á San Fernando.

Opinando otros, mas fundadamente, con Gil Gonzalez Dávila, Macanáz, y Semper que data del reinado del Sr. Don Juan I.

Que los Reyes tuvieron desde los tiempos mas antiguos personas con quienes aconsejarse en aquello que mas les pareciera, no prueba que existiese el Consejo, como institución.

Los prelados y los ricos-hombres fueron siempre los consejeros natos de los Reyes.

Durante la tutoría de D. Fernando IV existió un Consejo para el que se eligieron hombres buenos de las diferentes provincias. D. Alonso XI lo tuvo, según su



crónica, compuesto de dos caballeros, un eclesiástico, su ayo y un judío.

Y D. Enrique II quiso regularizar el suyo dándole la primitiva y antigua forma, de modo, que estuviesen en él representadas las provincias de que entonces se componía la monarquía; pero las desastrosas consecuencias de la batalla de Nájera no le permitieron llevar á cabo su proyecto.

Por último, consta que D. Juan I, en el testamento que hizo momentos antes de la fatal jornada de Aljubarrota contra los portugueses, nombró un *Consejo* compuesto del marqués de Villena, de los arzobispos de Toledo y Santiago, de tres caballeros, y de los diputados que eligieran las ciudades de Toledo, Burgos, Leon, Córdoba, Murcia y Sevilla: mas no es menos cierto, que este *Consejo* lo fue solo de Regencia, previniendo el caso de que sucumbiera en la pelea, y para que gobernase el reino durante la menor edad de su hijo.

No puede, pues, considerarse ni ser tenido este *Consejo*, ni tampoco ninguno de los anteriormente mencionados, como el origen del de Castilla, ni hasta aquí resulta que se les hubiese revestido de facultades, ni potestad alguna judicial.

Quien se las dió, y quien verdaderamente creó la institucion de que nos ocupamos, fue el mismo D. Juan I; pero algun tiempo despues de la espresada batalla de Aljubarrota, en las cortes de Valladolid de 1385, en las que, bien por acallar las murmuraciones de los pueblos, ó fuera por buscar un medio mas fácil de gobierno, nombró el *Consejo* con el personal de cuatro prelados, cuatro caballeros y cuatro ciudadanos, dando las ordenanzas por que habia de regirse y esponiendo los motivos de su resolucion en estos términos: «de nos se dice que fazemos las

*cosas por nuestra cabeza é sin consejo, lo cual non es así, segund que vos demostramos; é agora desque todos los del regno sopieren que habemos ordenado ciertos perlados é cavalleros é ciudadanos para que oyan é libren los fechos del regno, cesaran los dezires é ternan que lo que fazemos lo fazemos con consejo.*»

En aquellas ordenanzas se reservó para sí y á su firma, repitiéndolo en las cortes de Briviesca de 1387, todo lo relativo á gracias, presentaciones para iglesias, y nombramiento de empleados, derecho que siempre tuvieron, egercitaron y correspondió á nuestros Reyes en lo concerniente á la administracion de justicia, sin escepcion, por mas que Zurita, en sus anales de Aragon, haya querido dar otro origen al gran justicia de aquel reino, semejándolo á los esforos de Lacedemonia, y revistiéndolo de raras y extraordinarias facultades, que nunca tuvo, cual lo prueba la coleccion de fueros que en el siglo XIII escribia el obispo de Huesca D. Vidal de Canellas, que es la mas antigua y auténtica que se conoce.

El mismo Rey determinó «se sentar á juicio en público dos dias á la semana con los del consejo para oir y atender las quejas que contra sus oficiales y ministros se diesen,” siendo ésta la primera prueba que encontramos de las atribuciones judiciales de este tribunal, que despues tuvieron la mayor amplitud.

Y mandó finalmente aquel monarca en 1390, que pudiera el *Consejo* nombrar los corregidores; que hubiera en él una silla vacante para cuando tuviera á bien asistir á sus deliberaciones, y que fuera gobernador del mismo el obispo de Cuenca.

D. Enrique III aumentó el número de los consejeros, dando en 1406 en Segovia unas nuevas ordenanzas.



D. Juan II conservó á cuantos pusieron sus tutores, encargando á algunos de ellos que librasen las cosas de justicia y reformó las ordenanzas del tribunal en las cortes de Valladolid de 1442, dividiéndolo en dos salas, encargada la una de los negocios de gobierno y de los de justicia la otra.

Y D. Enrique IV, reduciendo el número de ministros, que en el anterior reinado habia llegado al de 65, segun algunos historiadores, lo compuso de dos prelados, dos caballeros y ocho doctores ó letrados, fijando desde entonces en la corte su residencia.

El tristísimo y lamentable estado que presentaba entonces la nacion, exigia con urgencia una radical reforma en la administracion de justicia, y que de ello se encargaran otras manos mas firmes y brisas. Habia llegado á su colmo el desorden, fomentado por la ambicion y parcialidades de los grandes que todo lo dominaban y á todo se atrevian, hasta el punto de insultar y escarnecer públicamente á la magestad real, dándose en Avila el gran escándalo de la deposicion de Enrique IV, cuya estatua, colocada en un tablado, fue ignominiosamente despojada de sus insignias.

Era, pues, necesario, para que el estado no se desquiciara, sostener á todo trance la autoridad de los tribunales y la jurisdiccion real, reprimiendo y conteniendo dentro de su esfera y justos límites á los eclesiásticos turbulentos y á los nobles sediciosos que pretendian, y casi habian logrado arrogarse todos los poderes, y esto fue precisamente lo que hicieron los Reyes Católicos, que por un especial favor de la Providencia, se encargaron de la gobernacion del reino en aquella calamitosa época.

En la crónica de estos monarcas, es-

crita por Pulgar, se refieren muchos y notables hechos que dan claro y evidente testimonio de que los sentimientos de piedad y de religion que les hicieron merecer aquel título glorioso, se hermanaban y corrian parejas con su celo y decision por conservar la dignidad de la corona y sus régias prerogativas, en lo que verdaderamente fueron inflexibles; pues admira, que en aquellas circunstancias se resistieran los nombramientos que para los obispados y prebendas de la iglesia de España venia haciendo la corte de Roma, como se resistieron, las provisiones, que sin la correspondiente y prévia presentacion real, habia decretado Inocencio VIII de los obispados de Cuenca y Zamora y del arzobispado de Sevilla, reteniéndose las bulas por el consejo, y espulsando á su embajador; al paso que se imponia la última pena y ahorcaba en la ciudad de Trujillo á los prohombres que acaudillaron el alboroto ocurrido en 1486 para libertar á un preso, atropellando al corregidor.

Estos y otros egemplares tan saludables como vigorosos, la deposicion del presidente y oidores de la Chancillería de Valladolid, en 1491, por haber otorgado una apelacion á Roma, y las disposiciones contenidas en la célebre instruccion de corregidores para la integridad y defensa de la jurisdiccion real contra toda clase de ataques y de usurpaciones, devolvieron la tranquilidad al reino; y para afirmarla, los mismos Reyes, accediendo tambien á las repetidas instancias de las cortes de Madrid de 1476 y de Toledo en 1480 hicieron en el *Consejo* varias y notabilísimas reformas.

Compusieronlo de un prelado, tres caballeros y ocho letrados, dando á los grandes la consideracion de consejeros natos.



Dividieronlo además en cinco salas ó estaciones, que vinieron á ser otros tantos *Consejos*; la primera entendia de los asuntos diplomáticos, la segunda de la decision de los de justicia, de los de hacienda la tercera, la cuarta de los reinos de Aragon, Sicilia, Nápoles y otros dominios, y á la quinta asistian los diputados de las santas hermandades.

Y mandaron despues, que constara su dotacion de dos procuradores fiscales, un prelado y doce plazas más, las nueve de letrados, sujetando á su jurisdiccion á todas las clases, y confiriéndoles la necesaria para conocer breve y sumariamente de todas las causas y negocios civiles y criminales que creyeran conveniente á su real servicio.

Felipe II lo formó esclusivamente de letrados, y los dos Felipes III y IV ampliaron sus atribuciones en asuntos de justicia, así como Carlos II en los de gobierno.

Felipe V le dió la nueva planta, que tomó el nombre de Macanáz su autor, en 10 de Noviembre de 1713; veinticuatro consejeros, cinco presidentes, un fiscal, dos abogados generales y cuatro secretarios constituyeron su personal, en cinco salas, de las que la primera y segunda conocian esclusivamente de negocios de gobierno, la tercera de los de justicia, la cuarta de los de provincia, y de lo criminal la quinta, restituyéndolo dos años despues á su antigua forma, en la que redujo á veintidos el número de los consejeros, añadiendo un fiscal, y designando á la sala tercera con el nombre de mil y quinientas, la cuarta con el de justicia, y la quinta con el de provincia.

El gran número de negocios que se agolpaban al *Consejo* decidió la creacion de otros, que se nombraron:

*Consejo de la Cámara*, al que Felipe II

en 1588 dió jurisdiccion privativa en los oficios de justicia, causas del real patronato, mercedes de títulos, licencias para fundar mayorazgos, indultos y convocatorias á las cortes del reino.

*Consejo de Estado*, que se fundó en 1480.

*Consejo supremo de Hacienda*, en 1533 por Felipe II.

*Consejo supremo de la Guerra*.

*Consejo de las órdenes*, único quizá, de cuantos existen en los países católicos, que compuesto de jueces legos y nombrados por la potestad civil, egerce jurisdiccion eclesiástica y conoce en apelacion de asuntos juzgados por tribunales eclesiásticos.

Del Almirantazgo, de la Inquisicion, de Cruzada, de Aragon, de Indias, de Italia, de Flandes y de Portugal, de los que no me permiten ocuparme los estrechos límites de un discurso.

El *Consejo* de Castilla fue suprimido por la constitucion de la monarquía de 1812 y sustituido por el de Estado en las atribuciones económicas y administrativas, y en las judiciales por el tribunal supremo de justicia, que á su vez tambien sufrió aquella suerte, reemplazándole el de España é Indias, hasta que por último lo restableció la constitucion de 1837; y es hoy el primero del reino en la gerarquía y orden judicial, así como el de Estado, que antes se denominó consejo real y tribunal supremo contencioso administrativo, lo es en su clase.

Del *Consejo*, trae tambien su origen el tribunal mayor de cuentas, y éste, con los eclesiásticos y de comercio, los de imprenta, los consejos provinciales, el de guerra y las cortes, cuando son llamadas á egercer funciones judiciales, completan el número de los que tenemos con el carácter de colegiados, cuya forma es la



que conviene y ha de darse á los unipersonales.

Para concluir, presentaré el cuadro de los trabajos de esta Audiencia, en el año último, cumpliendo con el deber que me impone la Real orden de 17 de Setiembre de 1845.

En lo civil, se han visto y fallado egecutoriamente 245 pleitos, 245 artículos, y 246 espedientes.

En lo criminal, se han sentenciado tambien egecutoriamente 2,182 causas con reos presentes, 1,050 contra ausentes y desconocidos, y se han determinado asimismo por las salas de justicia 1,119 reclamaciones sobre la rectificacion de las listas electorales para diputados á cortes.

Se han despachado por el Tribunal pleno 79 espedientes, 878 por la Sala de gobierno y 613 por la Junta inspectora penal, que ha practicado las visitas de los establecimientos de esta clase, segun está prevenido, adoptando las disposiciones oportunas para que los penados cumplan exactamente sus condenas, sobre cuyo particular es acertadísima la reforma que ha introducido la Real orden de 24 de Agosto ante próximo, disponiendo que los comandantes de los presidios remitan, con tres meses de anticipacion, á las *Juntas*, copias de las hojas histórico-penales de los confinados que estén para cumplir, para su exámen y comprobacion con las sentencias, evitándose de este modo las falsificaciones, que aquellos se pongan en libertad antes de su debido tiempo, ó que sufran mas del que corresponde.

Por la Regencia, se han resuelto, contando con los nombramientos de Jueces de paz, 2,275 espedientes.

Y han tomado posesion de sus respectivas plazas el Sr. Fiscal y 4 Sres. Ma-

gistrados, 19 Jueces de primera instancia, 16 Promotores fiscales, un Teniente fiscal, 2 Abogados fiscales, 42 Escribanos y 5 Subalternos del Tribunal.

Siéndome muy lisonjero dejar aquí consignado y dar un público testimonio, tanto del celo, inteligencia y laboriosidad de los Sres. Magistrados, como del Ministerio fiscal, y de todos los subalternos y dependientes de la Audiencia, que á porfía se han esmerado en llenar cumplidamente sus deberes, si bien he de repetir en este año la especial y honorífica mencion, que ya en los anteriores tuve la complacencia y la obligacion de hacer, del probo é infatigable Sr. Auditor de guerra, de los dignísimos letrados que nos ausilian, y de los demás que componen el insigne colegio de esta capital que tan brillantes pruebas nos han dado de su ilustracion, suficiencia y desprendimiento.

La importantísima institucion de los jueces de paz ha recibido en el año último considerables reformas, que contribuirán á su perfeccionamiento, y acelerarán el dia de la ampliacion y desarrollo que ha de tener, estendiendo el círculo de sus atribuciones con las que todavía corresponden á los Alcaldes en lo judicial, hasta que este ramo quede en todo independiente y separado del administrativo, segun el espíritu que presidió á la creacion y establecimiento de aquellos funcionarios.

Con este fin, basándose en la esperiencia, que es el mas seguro norte del acierto, y conforme á la indicacion y esposiciones de los Regentes de las Audiencias, se ha reducido su número dándoles mayor prestigio y consideracion, en tanto que, dejándolo bien atendido, se simplifica y regulariza el servicio, dictándose reglas oportunas y bien meditadas que deter-



minan el modo y los casos en que han de egercer la jurisdiccion, sustituyendo á los jueces de primera instancia, y fijan la condicion y los deberes de los secretarios.

Es, pues, ya indudable que esta benéfica institucion se arraiga y prospera en nuestro suelo, y que corresponderá á su objeto, produciendo bienes inmensos á la sociedad y á la administracion de justicia.

Como comprobante de ello, y por lo que respecta al territorio de esta Audiencia, puede presentarse el resultado de los datos, que con la mayor escrupulosidad se han recogido, correspondientes al año de 1857, á contar desde el 1.º de Febrero en que principiaron á egercer sus cargos los jueces de paz, cuyos datos podrán servir en su dia para completar la formacion de la estadística judicial en lo civil.

Segun ellos, han sido 5,943 los actos de conciliacion en que han intervenido, y quedaron completamente terminados por avenencia de las partes 2,774. No la hubo en 3,163, y solo en 6 resulta haberse interpuesto el recurso de nulidad. Los partidos judiciales de Alicante y de Vinaróz son en los que, comparativamente con los demás del territorio, incluso los de esta capital, se han celebrado mayor número de actos de conciliacion, llegando los del primero á 276 y los del segundo á 237, y el de Segorbe es el primero en las avenencias por aparecer casi en la proporcion de 8 á 1.

A 3,806 asciende el número de los juicios verbales decididos tambien por los jueces de paz, de los que se llevaron desde luego á efecto causando egecutoria las providencias por consentimiento de las partes en 3,424, y de las 332 que se apelaron fueron confirmadas 248, revocándose solo 84, lo que dá una ventajosa idea

del acierto y de la rectitud con que se han conducido aquellos funcionarios, pres-tándola asimismo las cifras anotadas muy relevante de su laboriosidad y esfuerzos para llenar su evangélica mision de paz, pues á ellos les deben tan inestimable bien, con el ahorro de crecidos gastos, molestias y perjuicios incalculables mas de 5,000 familias.

Comparada la estadística criminal del territorio de esta Audiencia en el año último con la del precedente, segun los datos, noticias y observaciones que con laudable puntualidad y correspondiendo á mi escitacion, se me han remitido por los jueces de primera instancia, se nota algun aumento en el número de las causas que se han incoado, si bien no lo ha tenido en muchos de los partidos judiciales, ni en consideracion á su importancia y gravedad, antes por el contrario, se advierte una disminucion progresiva en las de esta clase; y en los de Alberique, San Mateo, Gandía y Dolores, ofrece resultados muy satisfactorios la comparacion en ambos conceptos.

En los de Alicante, Orihuela, Callosa de Ensarriá y otros, se observa que, elevándose la cifra de los procedimientos, queda, sin embargo, muy reducida, descartando los que se han formado por faltas ó delitos leves que se penan correccionalmente, y es reparable, aunque tiene una esplicacion obvia, su crecimiento en el primero de los pueblos mencionados despues de la explotacion del ferro-carril, así como en los demás que se encuentran en igual caso.

Los de Chiva, Torrente, Moncada y Murviedro, en esta provincia, exigen se llame la atencion del gobierno y de la administracion sobre su estado para la adopcion de las medidas preventivas, que mejorando la instruccion de los pueblos y



su educacion moral y religiosa, eviten y minoren los frecuentes y grandes crímenes de que vienen siendo teatro mucho tiempo há, pudiendo decirse lo mismo del de Alcira, aunque en esta poblacion se ha hecho notable que desde el mes de Mayo al de Noviembre no se haya formado causa alguna sobre homicidio.

En el de Castellon, disminuye la criminalidad; pero merecen un especial cuidado y la proteccion de las Autoridades los pueblos de Villafamés y Borriol, así como el del Vall de Ujó en el de Nules, y muchos del partido de Segorbe.

El de Albocácer, ha mejorado mucho sus condiciones despues de la estincion completa de la partida de foragidos que lo afligia, gracias á los continuados y perseverantes esfuerzos de la nunca bien alabada guardia civil, que tanto siempre ausilia la accion de la justicia y tan importantes servicios presta en todo el distrito de esta Audiencia.

Los partidos de Enguera y Onteniente son en los que menos causas se han formado en el año que acaba de transcurrir, y sobresalen en sentido contrario los del distrito del Mar de esta ciudad y el de Alcira, entre todos los del territorio.

El uso de armas prohibidas, que tolera nuestra actual legislacion, el abuso de las fiestas y de las bebidas espirituosas, y el desarrollo de las pasiones políticas en estos pueblos meridionales en que la sangre hierve y circula con asombrosa rapidéz, son las causas determinantes de la mayor parte de los delitos que en ellos se cometen contra las personas, que son los mas graves y frecuentes.

La administracion de justicia se egerce libremente, con regularidad y sin graves obstáculos, naciendo sin embargo algunos de causas especiales de localidad, de la imperfecta division del territorio, en

lo que se distingue el partido judicial de Orihuela, de la dificultad de las comunicaciones en ciertas épocas, y de la carencia ó mal servicio de los correos, principalmente en muchos de los pueblos inmediatos á esta capital, lo que obliga á los jueces á valerse de medios aventurados y estraordinarios, que las mas de las veces frustran el éxito de una diligencia interesante, y siempre la retrasan, en grave y conocido daño público; pudiendo añadirse tambien á las causas, que embrazan ó dificultan la accion de la justicia, la indotacion de sus dependientes, las competencias con las autoridades administrativas, y la necesidad de instruir y seguir procedimientos por todos sus trámites legales para castigar pequeños hurtos y los de comestibles y frutos del campo, que antes de la reforma de nuestro Código se penaban como faltas. Sin embargo, los jueces de primera instancia, en general, se han hecho acreedores á nuestra consideracion y á la gratitud del pais, ofreciendo notables egemplos de inteligencia y laboriosidad, y siendo dignos de una particular mencion, en este punto, el de San Mateo, que no ha dejado causa alguna pendiente de las principiadas en el año, el de Orihuela que solo tiene una y los de Elche, Alcoy y Alberique en cuyos juzgados no pasan de tres las que existen.

Como un suceso notabilísimo que formará época en los fastos de esta Audiencia, y cuya memoria debe perpetuarse cual glorioso recuerdo y título de honra para el tribunal, mencionaré aquí la visita, que accediendo á su reverente invitacion, se dignaron hacerle nuestros Reyes, en la tarde del 3 de Junio último, con su Real familia, los Sres. Ministros y alta servidumbre que la acompañaban. Todos lo presenciasteis Señores. Todos fuisteis testigos de las distinciones que



debió el tribunal á sus escelsos monarcas. Todos pudisteis admirar de cerca sus relevantes dotes, su piedad religiosa, sus cristianos y caritativos sentimientos, su inagotable bondad, la estension y solidéz de sus conocimientos, su interés decidido por la administracion de justicia y la marcada deferencia y singular aprecio que mostraron á sus ministros. Todavía resuenan en nuestros oídos, y estoy seguro que nunca olvidareis, las encomiásticas frases que vertieron sus augustos labios para la Audiencia de Valencia, y las amabilísimas que dirigieron á cada uno de vosotros en particular por el recibimiento que se les habia hecho, modesto sí, pero decoroso y digno cual convenia á nuestra posicion y á las circunstancias.

Llenamos como siempre un deber, porque la toga nunca falta á los que le cumplen, y esto se calificó de obsequio, y la palabra agradecimiento casi nos hizo ruborizar, viniendo sin embargo á poner el colmo á nuestro entusiasmo. Entusiasmo, orgullo, el de dignidad, el legítimo, el que nosotros podemos tener, porque la toga que brilla poco por su color, entre tantos colores brillantes, fue honrada por los soberanos que dispensan las honras, y por los soberanos que enaltecen, colocada á una altura que bien pudieron conocerla y distinguirla, en la memorable tarde del 3 de Junio, las 200,000 almas que aclamaban con frenesí á los Reyes de la tierra humildemente prosternados ante el Rey del cielo. ¡Triunfo magnífico! de la religion y de la monarquía, que enloqueció á Valencia, tributando la mas grande ovacion de las conocidas en el siglo á las dos instituciones, que con la de la justicia, sostienen el mundo. De la justicia, sí, porque sin la justicia no hay monarquía, ni hay religion, ni se concibe el mundo. Porque la justicia es Dios. — HE DICHO.

#### RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

La ley 61 de Toro prohíbe que la muger sea fiadora de su marido, aunque se alegue que la deuda fue en provecho suyo, y que cuando se obligasen de mancomun marido y muger, ésta solo responderá en aquella parte que se probare haberse convertido en su utilidad.

Sin embargo de esta prohibicion tan terminante, hemos visto y estamos viendo cada dia escrituras de mancomunidad otorgadas por marido y muger; y creyendo inútil la cláusula que consignan los escribanos, relativa á la renuncia que hacen las mugeres del privilegio que se dice les concede dicha ley, la hemos combatido diferentes veces, apoyándonos con el contesto literal de aquella, por ser prohibitiva, y que las de esta clase no pueden renunciarse sin una expresa permission. No obstante, como en varias ocasiones el formulario de los instrumentos es la esencia de ellos y no la voluntad de los contratantes, ni las prescripciones de la ley, y solo se atiende, digámoslo así, á la costumbre; se sigue incluyendo en las escrituras de mancomunidad de marido y muger la renuncia de la ley citada, añadiendo el juramento de no haber sido persuadida ni atemorizada directa ni indirectamente, ni por otra persona en su nombre, y que la otorga de su libre y espontánea voluntad por convertirse sus efectos en su utilidad.

La renuncia y juramento de la muger en este caso, no es mas que una confesion ante testigos y el depositario de la fe pública; por consiguiente basta para compeler á la muger casada que otorgó la escritura de obligacion. Esta es la razon de mas fuerza que se alega para sostener la responsion de la muger, sin hacerse cargo que, colocada la cuestion en tela de juicio, por negarse aquella al cumplimiento del contrato, es menester se justifique plenamente, ó venga una prueba probada, como dice la ley de Partida, de que la deuda que se la reclama se convirtió en su provecho. De modo que si con la renuncia, el juramento y la declaracion de que el contrato celebrado la era útil, es indispensable acreditar el beneficio que haya reportado á la muger: ¿Para qué sirve la citada cláusula en las escrituras de obligacion mancomunada de marido y muger? De nada, porque siempre la prueba del beneficio que haya alcanzado, se ha de utilizar habiendo negativa ú oposicion al pago, y aun entonces no se satisfará mas cantidad que aquella que se justifi- care haber sido en su provecho.



La tendencia que observamos en los notarios á disminuir el formulario en toda clase de escrituras, es lo que nos ha impulsado á llamar la atencion sobre la inoportunidad de la cláusula mencionada, para que se tenga presente nuestra indicacion que viene apoyada en la jurisprudencia admitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha resuelto:

1.º «Que para la validacion de las obligaciones mancomunadas de marido y muger, debe probarse la circunstancia, en lo que afectan á ésta, de que redundaron en su provecho:

2.º «Que la ley 61 de Toro no pueden renunciarse, ni aun con juramento, por la muger casada:

3.º «Que las leyes prohibitivas no son generalmente renunciabiles, sin permision de la ley, y que aun siendo verdaderos privilegios, no siempre son susceptibles de renuncia sin dicho requisito: Y

4.º «Que es visiblemente contraria, así á la letra como al espíritu de dicha ley, toda doctrina é interpretacion que tienda á rebajar su observancia, cualesquiera que sean los precedentes en que se funden, las autoridades en que se apoyen y los casos en que haya prevalecido.»

Al redactar estas líneas no llevamos otro objeto que el que se orienten de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, aquellos que no hayan tenido ocasion de leer este fallo; y por ello nos abstenemos de entrar en consideraciones sobre los dos extremos de la citada ley y escepcion concedida en la misma, puesto que no se trata mas que de la inoportunidad de la cláusula.

Vicente Llobet y Sanchis.

## Variedades.

El Sr. D. José María Royo y Murciano, antiguo Diputado á Córtes, ex-Gobernador de provincia y magistrado cesante, con cuya amistad y suscripcion nos honramos, y á quien debimos un artículo el año anterior, ha escrito un opúsculo dedicado al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, sobre la situacion del *poder judicial de España*, del que ha tenido la fina atencion de remitir dos ejemplares á nuestra redaccion. Dámosle por ello las gracias, y aunque otros periódicos nos hayan precedido á la justa alabanza, debemos repetirla. El tema del opúsculo es la inamovilidad judicial, y este es un principio que

profesan del modo mas absoluto, cuantos se interesan por la buena administracion de justicia.

*Reforma en la ley de quintas.* — Es muy justa y acertada la que acaba de hacerse por una reciente real orden en ocasion del caso que vamos á referir:

Un soldado del regimiento de infanteria de América, Matias Vallarino, acudió á S. M. solicitando su licencia absoluta para atender á la subsistencia de cuatro hermanos huérfanos de menor edad. La ley de reemplazos determina, y así lo ha declarado de nuevo el tribunal supremo de guerra y marina, á cuyo informe fue pasada la solicitud de Vallarino, que las exenciones del servicio que segun la ley existan en el acto del sorteo y no se espusiesen en el término y forma que la misma determina, serán siempre desestimadas, por legítimas y verdaderas que fueren, toda vez que en ellas puedan ocurrir la mala fe y el abuso para beneficiar un tercero con daño del servicio; pero el ministerio de la guerra, con acuerdo del mismo tribunal, ha resuelto que los casos de escepcion comprendidos en el art. 76, cap. 9.º de la antedicha ley de 30 de Enero de 1856, y que deben calificarse como afectos al derecho de naturaleza y al deber de humanidad, esto es, al amparo que el padre y la madre, los abuelos y los hermanos deben recibir del hijo, nieto y hermano respectivamente, puedan tener aplicacion, siempre que aquellos se encuentren en las circunstancias que la precitada ley señala, cuando éstas ocurran despues de haber venido los interesados al servicio, á cuyo efecto, y á petición de parte, deberán formarse en el cuerpo en que sirvan las diligencias correspondientes para justificar debidamente los extremos necesarios por medio de sumaria informacion, donde uniendo las certificaciones, declaraciones y comprobantes que identifiquen la verdad del motivo de exencion, y la fecha en que ha tenido origen, se dirijan por el gefe del cuerpo al Director general del arma, quien con su exámen é informe lo trasmitirá al tribunal supremo de guerra y marina, en el cual se declarará si está bien hecha la justificacion y si se han satisfecho los requisitos de la ley, de modo que á haber ocurrido el motivo de que se trate con anterioridad á la declaracion de soldado, habria sido por la misma esceptuado de esta suerte; y finalmente, que con esta formalidad pase al ministerio consultando á S. M. si corresponde la exencion, la cual siempre recaerá como un efecto graciable de su real munificencia.

(Del Faro Nacional.)

Por lo no firmado y por la seccion de variedades,  
E. Márquez.

EDITOR RESPONSABLE, *Lic.º* D. José Marco.

Valencia: Imprenta de José Rius, plaza de San Jorge. — 1859.